

# *Las transiciones democráticas*

*Josep Sánchez Cervelló*

## **I. El marco internacional**

Tres factores esenciales de carácter externo influyeron en las transiciones ibéricas: el papel de los EE UU, el de Europa y el de la URSS <sup>1</sup>.

El final de la década de los sesenta e inicios de los setenta estuvieron marcados a nivel político por la distensión entre los bloques (como evidenciaron los Acuerdos SALT I de 1972 y SALT II de 1979). Los EE UD centraron sus prioridades en la guerra del Vietnam donde, después de la ofensiva vienteong del Têt en 1968, entendieron que no podían ganar y que necesitaban encontrar una salida negociada con la URSS y con la República Popular de China. Su posterior derrota en 1973 y el escándalo «Watergate», que obligó a dimitir al presidente Richard Nixon, hicieron que se centrasen esencialmente en su política doméstica, permitiendo mayores niveles de autonomía europea. Además, habían fracasado en varios intentos de mediar entre sus aliados de la ÜTAN, como con Grecia y Turquía por la cuestión de Chipre, lo que explicaría la actuación contradictoria del gobierno norteamericano

---

<sup>1</sup> Sobre este período son imprescindibles: F. VELGA, E. UCÉLAY y A. DUARTE, *La paz simulada. Una historia de la guerra fría, 1941-1991*, Madrid, Alianza, 1997, para el contexto general; para el ibérico, A. TELO y H. DE LA TORRE, *Portugal e Espanha nos sistemas internacionais contemporâneos*, Lisboa, Cosmos, 2000. Para la política externa portuguesa: Jorge Borges MACEDO, *História Diplomática Portuguesa. Constantes e linhas de Força*, Lisboa, IDN s.d. (1988). Para el caso de España: I. B. VILAR (ed.), *Relaciones Internacionales en la España Contemporánea*, Murcia, Universidad de Murcia, 1989.

en las transiCiones peninsulares y el papel mucho más relevante de los países de la CEE.

La «Ostpolitik» alemana, diseñada por Willy Brandt a partir de 1969 y seguida por Helmut Schmidt, tras la dimisión de aquél en 1974, reforzaba el papel de Europa. En esa misma dirección se encaminaba la política francesa promovida por De Gaulle, con el doble objetivo de asegurar la autonomía de Francia en el seno de la OTAN y de garantizarle un papel más relevante a la construcción europea. Igual tónica siguieron posteriormente G. Pompidou y Giscard d'Estaing. También los laboristas británicos, en el poder desde 1964, iniciaron un claro acercamiento a la Europa Comunitaria y su sucesor, el conservador Heath (1970-1974), recogió los frutos al conseguir integrar a su país en la CEE (1973). Política que prosiguió con el nuevo ciclo laborista Wilson y Callaghan (1974-1979).

La actuación relevante de los socialistas germanos, británicos y franceses (Mitterrand se consolidó en las presidenciales de 1974 como líder de la Unión de Izquierdas con prácticamente la mitad de los votos del país) garantizaron el papel destacado que la Internacional Socialista (IS) iba a tener en las transiciones ibéricas, y de hecho su presidente, Willy Brandt, avaló, en vísperas de los cambios políticos, la formación del Partido Socialista Portugués (PS), creado en abril de 1973 en Bad Minstereifel (RFA), y la renovación del PSOE que lo alejó de la órbita inoperante del exilio y lo lanzó en la senda del poder en el congreso celebrado en Suresnes en octubre de 1974. Por tanto, un año antes de la caída de la dictadura en Portugal y un año antes de la muerte de Franco, la IS asentó en bases moderadas a la izquierda ibérica apoyando a las formaciones de Mario Soares y Felipe González, dándoles medios económicos y reconocimiento internacional para que estuviesen en condiciones de enfrentarse con éxito a la fuerza del PCP y del PCE y a sus organizaciones de masas.

La URSS, con la implantación de la doctrina Bréznnev (puesta en evidencia en el aplastamiento de la «Primavera de Praga» en 1968), establecía que cada Estado socialista no sólo era responsable ante su pueblo sino también ante la comunidad de miembros del Pacto de Varsovia, reduciendo así su soberanía interna. El reconocimiento del derecho de intervención del Este en sus «propios» asuntos permitía, en reciprocidad, la plena capacidad del otro bloque para solucionar en su área sus eventuales conflictos, lo que garantizaba una salida prooccidental a las transiciones ibéricas. Además la URSS estaba en

ese período interesadísima en apoyar la autonomía de la CEE en relación a los EE UU y en potenciar la distensión, lo que pasó a ser prioritario tras el acercamiento de Washington a Pekín, que se había iniciado con la visita de Nixon a la República Popular China en febrero de 1972. Por eso, los soviéticos centraron sus esfuerzos en la realización de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea que debía celebrarse en Helsinki en julio-agosto de 1975, lo que explica que el dirigente polaco Edward Gierek, en visita a Portugal en febrero de ese año, señalase a los dirigentes del PCP que una revolución comunista era imposible en Portugal<sup>2</sup>. Aunque eso no significó que tras el fracaso del golpe spinolista del 11 de marzo de 1975 y el control posterior del aparato de Estado por parte del PCP no se hubiesen dibujado en el seno de la *inlelligenzia* soviética dos líneas: la de los duros de la *normenklalura*, capitaneados por el ideólogo del *peus* Roris Ponomarev, miembro del Politburó, que aceptaban que el PCP intentase implantar la revolución comunista y si fallaba tendría que adaptarse a la democracia liberal; y la de la diplomacia que, tras las elecciones de abril de 1975 en las que el PCP tuvo unos resultados muy pobres, fue sensible a la argumentación de los países de la CEE, que aseguraron reiteradamente a la URSS que en caso de que el PCP tomase el poder en Lisboa la colaboración intereuropea, que debería consolidarse en Helsinki, acabaría de golpe. Evidentemente la Conferencia interesaba más a la URSS que el hipotético, y en cualquier caso efímero, control comunista de Portugal. Los resultados de Helsinki permitieron garantizar el *status quo* europeo y establecer acuerdos de cooperación económica y cultural.

En relación a Portugal, la diplomacia norteamericana también se mostró dubitativa en cuanto el camino a seguir, esbozándose dos líneas: la que defendía el secretario de Estado H. Kissinger y la de F. Carlucci. Kissinger creía, como le señaló a Mario Soares, a principios de 1975, que Portugal estaba perdido para Occidente y que el comunismo acabaría implantándose, convirtiéndose en una vacuna para el resto de Europa. Pero Soares le contradijo señalando que eso no sería así porque Europa les ayudaría, a lo que aquél habría respondido en francés «*Ron chance, Europa*»<sup>3</sup>. En cambio, el embajador en Lisboa, Frank Carlucci, nombrado en noviembre de 1974, se alineó siempre con los postulados

---

<sup>2</sup> Entrevista con el coronel João Varela Gomes, Lisboa, 18 de junio de 1986.

<sup>3</sup> Entrevista con el presidente de la República Mario Soares, Lisboa, Palacio de Belem, 20 de junio de 1986.

que preveían la victoria democrática en colaboración con los países europeos.

En España la interferencia externa fue menos significativa porque, solucionada la transición lusa en una perspectiva favorable a los intereses occidentales, ya no existió la tentación de reforzar o maquillar la dictadura, como habría acontecido si el comunismo se hubiese instalado en la frontera terrestre más extensa de España. Y como sucedió en Corea del Sur hasta 1993. También la capacidad de maniobra del PCE fue menor, no sólo porque no se alineaba con las tesis de la URSS, como demostró con su condena de la invasión checoslovaca de 1968, sino también porque en España no hubo un vacío de poder como en Portugal tras la revolución y Occidente, desde el principio, apostó por la monarquía de Juan Carlos, a la que la izquierda brindó su apoyo 4.

Si en las metrópolis la transición se produjo, a pesar de las vacilaciones señaladas en el caso portugués, conforme al reparto del mundo diseñado en la posguerra mundial, no sucedió lo mismo en relación a las colonias. Conviene señalar que la democratización tuvo en ambos países repercusiones más allá del teatro europeo, ya que coincidió con el final del ciclo imperial tanto portugués como español, si bien las de la descolonización portuguesa fueron, en mucho, superiores a las de España en virtud de la riqueza, la extensión y la permanencia de cerca de 750.000 colonos en Angola y Mozambique 5. No hay que olvidar además las implicaciones geoestratégicas que supuso el ascenso al gobierno de partidos únicos marxistas-leninistas en el cono sur africano, considerado vital para Occidente en virtud de las reservas de minerales estratégicos. El avance comunista en aquella región fue una de las causas que impidió al prosoviético Polisario su llegada al poder en el Sahara español y también explica que, al no estar en África la bipolarización asentada en fronteras definidas, el proceso descolonizador acabase en conflictos que, en el caso de Angola y el Sahara, aún permanecen irresolutos.

---

<sup>4</sup> Las transiciones en la Península iniciarían la tercera oleada democratizadora en la historia de la humanidad. Ver Samuel P. HUNTINGTON, *The third wave. Democratization in the late twentieth century*, Oklahoma, University of Oklahoma Press, 1991. Ver también ABAN WILLIAMS, *Southern Europe transformed. Political and economic change in Greece, Italy, Portugal and Spain*, Harper & Row, 1984.

<sup>5</sup> J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, «El factor africano en las transiciones ibéricas», *Studia Africana*, núm. 10, marzo 1999, pp. 155-168.

## 2. De la pretransición a la democratización

Portugal inició la pretransición antes que España. En 1968, cuando el viejo dictador Oliveira Salazar (1889-1970) sufrió un accidente, fue sustituido por un reformista del régimen, Marcello Caetano (1906-1980), que inició una política liberalizante en la primera etapa de su consulado (1968-1970) consistente en una apertura política sin descolonizar, pues sostenía que la herencia ultramarina era irrenunciable, lo cual era cuestionado por amplios sectores de la sociedad portuguesa cansados del esfuerzo de guerra que el país venía realizando desde 1961<sup>6</sup>.

El conflicto africano provocó el debilitamiento del propio régimen que empezó a sufrir disensiones en el plano político, entre «ultras» y liberales, y en el económico, pues la guerra se había revelado contraproducente para algunos sectores industriales, por el progresivo aislamiento internacional y por los desequilibrios que introducía en la economía, especialmente para industrias que precisaban del mercado exterior, vedado por la política colonial de la dictadura. Las Fuerzas Armadas también traslucían el desgaste de una guerra sin solución militar; y, por su parte, la Iglesia se fue distanciando del régimen, especialmente a partir de 1967 cuando Pablo VI difundió la encíclica *Populorum progressio* que atacaba el colonialismo. A esta disgregación de los apoyos tradicionales de la dictadura se unió la rebelión del mundo de la cultura, el cansancio de las clases medias y, sobre todo, la acción persistente de la oposición que, tanto en las colonias como en Portugal, contestaba su legitimidad. Además la política de Caetano causó recelos en los sectores más duros del salazarismo por su tímida apertura política, pues acabó con el exilio de las dos figuras más importantes de la oposición: el obispo de Oporto, don António Ferreira Gomes, y el dirigente socialista, Mario Soares. También potenció los sindicatos, en un intento de transformarlos en organismos efectivos de negociación con la patronal; reformó la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE), que pasó a llamarse Dirección General de Seguridad (DGS); y atenuó la censura de prensa, lo que propició la aparición de muchas publicaciones consideradas hasta entonces como subversivas o «inmorales».

---

( Sobre el Estado Novo ver H. DE LA TORRE, *El Portugal de Salazar*, Madrid, Arco Libros, 1997, y J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, «El caetanismo», en H. DE LA TORRE (ed.), *Portugal y España en el cambio político*, Mérida, UNED, 1989, pp. 109-118.

La idea de mudanza fue también reforzada por la personalidad del nuevo primer ministro, tan diferente de la del misterioso y asceta Salazar. A diferencia de éste, Caetano tenía una familia, se le conocían sus hábitos, aparecía en público con frecuencia y se dirigía a sus ciudadanos por radio y televisión regularmente.

Caetano, para consolidarse en el poder y ampliar su base de apoyo, pensó aprovechar el marco electoral de 1969, consultando a la población acerca del problema crucial del régimen, la cuestión colonial. Por eso estas elecciones, que habían de celebrarse en octubre, fueron planteadas como un factor capaz de garantizarle los apoyos necesarios: internamente, reforzando su imagen ante sus pares de la dictadura y legitimando su autoridad ante la oposición democrática; y en el ámbito internacional, le podrían ayudar a desbloquear el clima de hostilidad en relación a Portugal, que era criticado en todos los foros internacionales.

Con vistas al acto electoral renovó el partido único, la Unión Nacional (UN), con gente joven que nunca había participado en política y que estaba más cerca de la oposición que del Gobierno, por lo que acabaron constituyendo un grupo liberal denominado «tercera fuerza» que se distanció tanto del ejecutivo como de los sectores democráticos. Dos tercios de los 150 candidatos que la UN presentó a la Asamblea Nacional lo eran por primera vez. Para dar más credibilidad al escrutinio el Gobierno modificó la Ley Electoral, aumentando el número hipotético de votantes, aunque no se permitió el voto ni a analfabetos ni a emigrantes. Se consintió, por primera vez, la existencia temporal de organizaciones políticas de oposición, y la fiscalización de las votaciones. Medidas que, a pesar de significar un avance, eran muy restrictivas, pues el censo electoral abarcaba apenas el 15 por 100 de los electores. La victoria del Gobierno, como siempre, fue aplastante; no consiguiendo la oposición elegir ningún diputado, y la solución que se dio a la cuestión ultramarina: la de conceder una mayor autonomía para las colonias, rechazando las tesis integracionistas, federalistas o independentistas, no modificó las causas de la guerra.

El resultado de las elecciones y la dinámica de perpetuar la situación autoritaria provocaron una indudable sensación de frustración en la oposición, pues incluso el PCP tenía puestas ciertas ilusiones en un cambio gradual. La oposición liberal-socialista, la que más había apostado por la vía de la legalidad, perdió credibilidad. En contrapartida aumentó el radicalismo, sobre todo en los sectores juveniles que, tras las elecciones de 1969, entraron por primera vez en las lides políticas

con propuestas mucho más izquierdistas y decididamente revolucionanas.

A principios de 1970 era todavía Caetano quien detentaba la iniciativa de la conducción política. En enero realizó una remodelación ministerial tendente a llevar al ejecutivo a una joven generación de tecnócratas, cercanos al Opus Dei, para realizar en Portugal lo que los «lópezes» estaban haciendo en España: una gestión eficaz y actualizada de la economía y del Estado, pero sin democratizar el régimen. En consecuencia el enfrentamiento con la izquierda fue cada vez más claro -con la detención de los opositores más moderados y el nuevo exilio de Mario Soares-. A su vez el ala más ortodoxa de la dictadura se distanció del primer ministro por el problema ultramarino cuando impulsó, en 1970, la Revisión de la Constitución de 1933, por la cual el Estado portugués, a pesar de continuar siendo unitario, pasó a tener regiones autónomas. Esa Revisión fue un fracaso y estuvo acompañada por otro mayor, en agosto de 1972, cuando el partido único del que Caetano era presidente, confirmó al almirante Thomaz como presidente de la República por otros siete años, cuando ya contaba 77, y después de haber ostentado el cargo durante catorce. La reelección de Thomaz no fue la solución más feliz para Caetano, ni para las reformas que decía querer introducir, ya que era clara la disparidad de criterios entre ambos. Esta acción desacreditó aún más al Gobierno y provocó un profundo malestar en el círculo íntimo de Caetano, comprometiendo definitivamente la salida pacífica a la dictadura.

En 1972 se incrementaron los poderes de la policía política, desamparando aún más a los detenidos, los cuales podían permanecer durante seis años sin control judicial, dependiendo de la DGS, que estaba autorizada a encarcelar sin intervención de los tribunales. Pero el súbito endurecimiento de Caetano tampoco agradó a los «ultras» que le reprochaban la anterior apertura. De hecho, a pesar de los esfuerzos de apaciguamiento realizados, estos sectores conspiraron contra su gobierno. Así, en diciembre de 1973, se denunció la existencia de un golpe capitaneado por elementos africanistas, tanto militares como civiles, y el primer ministro vivió los últimos tiempos de su consulado obsesionado por las maniobras de la derecha.

En 1973 se produjeron nuevas elecciones a la asamblea legislativa, pero la oposición, que había aprendido la lección de 1969, actuó unida, desistiendo de acudir al escrutinio, contrariando así al régimen del que sabía que ya nada podía esperar. Cerrados todos los cauces, sólo

le quedaba intentar derribar al Gobierno por la fuerza y cuando, en septiembre de 1973, surgió el Movimiento de los Capitanes, la convergencia entre la oposición civil y la oposición militar se tornó inevitable.

La disidencia política a la que tuvo que hacer frente Caetano se centraha, básicamente, en dos polos: la Acción Socialista Portuguesa (ASP), transformada en 1973 en PS, y el PCP, existiendo también algún pequeño grupo marxista-leninista. Además durante su consulado apareció también la lucha armada desencadenada a partir de 1967 Y que sólo concluiría con el 25 de abril.

En paralelo con la crisis política, la institución militar tenía gravísimos problemas para reclutar no sólo soldados, sino incluso oficiales, ya que en la sociedad portuguesa la oposición a la guerra aumentó incesantemente. Reflejo de esto fue la fuerte emigración. Así Portugal presenta, caso único en Europa, un retroceso demográfico entre 1960 y 1970. Es evidente la relación que esto tiene con la guerra, ya que a pesar de que muchos de los que salieron ya habían cumplido el servicio militar, con la continuación del conflicto se arriesgaban a hacerlo por segunda vez. Las cifras oficiales revelan que 107.000 jóvenes emigraron.

Los militares habían iniciado un movimiento reivindicativo por cuestiones profesionales, en septiembre de 1973. En julio y agosto, el Gobierno había publicado dos decretos con los que pretendía suplir la falta de candidatos a la Academia Militar. Para ello se procuró incentivar a los capitanes de milicias, para que, tras cuatro años de experiencia de guerra, continuasen en filas, facilitando su entrada en la Escala Activa, tras un curso acelerado en la Academia Militar de dos semestres, en lugar de los cuatro años que precisaban los cadetes para salir como tenientes. Según estos diplomas, acabado el curso intensivo, aquellos oficiales pasaban a tener la antigüedad desde el momento en que habían sido nombrados tenientes de la Escala de Complemento, sobrepassando así a los militares profesionales. Las protestas fueron creciendo en intensidad y vigor en los grados intermedios, los más perjudicados por esta legislación y por la guerra. Pronto fueron conscientes de que la guerra, desgastadora y sin visos de finalizar, era también causante de su empeoramiento socioprofesional. Además, a partir de marzo de 1973, en Guinea, y posteriormente en Mozambique, la guerrilla utilizó misiles antiaéreos SAM-7, lo que redujo ostensiblemente la capacidad aérea portuguesa, por lo que los capitanes cuestionaron aún más la política guber-



namental y exigieron su rectificación para encontrar una solución política al conflicto. El Gobierno no quiso modificar su política y los militares ocuparon el poder con ese fin, dando un golpe de Estado el 25 de abril de 1974. En contacto con los conspiradores estaba la oposición política, especialmente la moderada, que en todo momento dio cobertura a su acción.

El golpe de abril abrió un período confuso y conflictivo durante 1974-1975, en el transcurso del cual se asentaron las bases del modelo democrático que Portugal seguiría posteriormente y del cual las Fuerzas Armadas fueron la columna vertebral. La principal característica de la Revolución de los Claveles es que los militares lideraron el proceso. Su actuación fue posible no sólo por su manifiesta voluntad intervencionista, sino también por la actitud consciente de subalternización de todas las fuerzas políticas, que se habían acostumbrado durante toda la vida del régimen a ensalzarlos y piropearlos, con la esperanza de que realizasen un levantamiento militar contra el «Estado Novo», y a huscar durante la Revolución su alianza para imponer sus puntos de vista, frente a los grupos políticos rivales.

El régimen democrático en su primera etapa (25 de abril-30 de septiembre de 1974) se caracterizó por la ambigüedad en el tema colonial. El general Spínola, nombrado presidente de la República tras el golpe de Estado, quería imponer sus tesis federalistas (anunciadas en su libro *Portugal y el Futuro*) a unos movimientos de liberación que, entonces más que nunca, eran conscientes de su poder, por lo que intensificaron la guerra, lo que llevó a los oficiales revolucionarios agrupados en el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA) a presionar al general para buscar una salida negociada al conflicto, que fuese del agrado de las organizaciones nacionalistas africanas. En esa pretensión el MFA contó con la complicidad de la izquierda que, desde el Gobierno y desde la calle, coartó los movimientos de Spínola, que sólo pudo reunir a simpatizantes del antiguo régimen y a los partidos de derecha de nuevo cuño: Partido Popular Democrático (PPD) y Centro Democrático y Social (CDS), todavía en fase de organización. Spínola, incapaz de reunir apoyos superiores a los de sus adversarios, y tras fracasar en la realización de un golpe de fuerza, dimitió el 30 de septiembre de 1974, pero antes se había visto obligado a reconocer el derecho de las colonias a la independencia.

La segunda etapa de la Revolución (de 30 de septiembre a 11 de marzo de 1975) estuvo marcada por la hegemonía de los cuadros

intermedios militares del MFA que coincidieron en la elección del general Costa Comes como nuevo presidente de la República; en el propósito de concluir el proceso de descolonización en favor de los movimientos izquierdistas [Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), Partido Africano de la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAICG), Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), Movimiento de Liberación de Santo Tomé y Príncipe (MLSTP)]; y en el de asentar su hegemonía en la sociedad y en las Fuerzas Armadas.<sup>7</sup> Pero, por otro lado, se mostraron incapaces de mantener la unidad del MFA, dentro del cual pronto estallaron los conflictos. Tres tendencias se esbozaron: una encabezada por el primer ministro Vasco Gonçalves, con apoyos en la Marina, y que era partidaria de realizar la revolución de manera inmediata, a cualquier precio, con el respaldo del PCP y de las organizaciones de su entorno; otra encabezada por Otelo Saraiva de Carvalho, comandante del Comando Operativo del Continente (COPCON), formado por unidades revolucionarias con gran poder bélico, que postulaba una revolución socialista, consejista y autogestionaria apoyándose en las organizaciones de extrema izquierda leninistas, pero anti-PCP; y la última, la moderada, encabezada por el mayor Melo Antunes con apoyos en el Ejército y en la Fuerza Aérea que pretendía la consecución del socialismo democrático al margen de los bloques y, aunque de forma crítica, aparecía ligado al Partido Socialista (PS). Las disputas, durante esta etapa, obedecían a cuestiones de política interna y al modelo y ritmo que cada uno quería imponer a la revolución.

Esta indefinición política se despejó durante la tercera etapa, que se extendió del 11 de marzo hasta el 25 de noviembre de 1975. Los «gonçalvistas», mejor organizados, con mayor cohesión ideológica y con una dirección conspirativa anterior al propio Movimiento de Capitanes, fueron consolidándose en el aparato del Estado, no sólo en el poder ejecutivo, donde el general Vasco Gonçalves era primer ministro desde julio de 1974, sino en los servicios secretos, en las cúpulas del Ejército y de la Armada, y también entre los suboficiales. Tan sólo la jerarquía de la Fuerza Aérea les era manifiestamente desafecta, pero el «gonçalvismo» logró, sin embargo, eliminar esa oposición cuando el 11 de marzo el general Spínola cayó en la trampa de intentar un golpe de Estado, apoyado sobre todo en la aviación. Sus movimientos, conocidos de ante-

---

<sup>7</sup> Sobre la descolonización lusa ver J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, *El último imperio occidental. La descolonización portuguesa (1974-1975)*, Mérida, UNED, «Cuadernos de Estudios Luso-Españoles», núm. 2, 1998.

mano, fueron neutralizados inmediatamente y su acción provocó el efecto contrario al pretendido, pues consolidó a los «gongalvistas» aún más en el aparato del Estado, a través de la creación de dos nuevos organismos militares, que mayoritariamente controlaron, el Consejo de la Revolución (CR), órgano ejecutivo junto con el Gobierno, y la Asamblea del MFA, órgano legislativo, tanto civil como militar. Inmediatamente decretaron la nacionalización de la banca, de los seguros y la Reforma Agraria. Apenas escapaba de su control la futura elección de la Asamblea Constituyente. Para neutralizarla obligaron a los partidos a firmar un Pacto con el MFA, por el cual a cambio de las elecciones, las fuerzas políticas reducían el papel de la futura Asamblea a la elaboración de la Constitución. Las elecciones se celebraron el 25 de abril de 1975 y los «gongalvistas», con sus aliados civiles, cosecharon una clara derrota, pues el PCP apenas obtuvo el 14,4 % de los sufragios, mientras que sus oponentes, el PS y el PPD, obtenían respectivamente el 34,8 y el 24,3 %.

A partir de este momento la ruptura entre «gongalvistas» y «moderados» fue un hecho. Estos últimos, poco a poco, con la ayuda de la inmensa mayoría de la institución militar y de la sociedad civil, expulsaron a los primeros del control de las Fuerzas Armadas y, por ende, del aparato del Estado. Este paulatino retroceso trató de ser neutralizado por los «gongalvistas» con una maniobra militar con la que no pretendían alcanzar el poder, pues en ese momento eran conscientes de que no disponían de fuerzas para ello, sino apenas mejorar sus posiciones en la cúpula militar, sobre todo a nivel de la Fuerza Aérea y del Ejército. Los «moderados», a su vez, con el general Eanes a la cabeza, neutralizaron esa acción, saliendo vencedores de la confrontación que se produjo el 25 de noviembre de 1975. Mientras, los «copconistas» se mantenían equidistantes del conflicto. A partir de entonces se inició el proceso de normalización política, conseguida después de que las facciones «gongalvista» y «copconista» fueran desalojadas del poder y las Fuerzas Armadas expurgadas de sus partidarios. La normalidad militar se consiguió con la «Ley de Bases Fundamentales para la Reorganización de las Fuerzas Armadas», de diciembre de 1975, que dejaba sin vigencia el I Pacto MFA-Partidos. Señalaba que cuando entrase en vigor la nueva Constitución los militares, a través de la cadena jerárquica, obedecerían a los órganos de poder en ella consagrados. Era el final del MFA como organización autónoma de las Fuerzas Armadas y como fuente de poder en la sociedad civil, pues indicaba que todas las Fuerzas Armadas integraban el MFA. Apenas

el Consejo de la Revolución (CR) quedaba como órgano revolucionario militar que, desde el 25 de noviembre, estaba en manos de los moderados.

En febrero de 1976, el CR y los partidos políticos firmaron un nuevo acuerdo (II Pacto MFA-Partidos), en el cual no se contemplaba la participación directa de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del proceso político, y se reforzaba el papel del presidente de la República, que pasaba a elegirse democráticamente. Además este CR, reestructurado, mantuvo la mayor parte de las atribuciones que le confería el anterior Pacto, se encargaba de fiscalizar la constitucionalidad de las leyes, y podía legislar en exclusiva sobre materia militar. Este acuerdo quedó íntegramente inducido en la Constitución portuguesa de abril de 1976, que fue aprobada con los votos favorables de comunistas, socialistas y socialdemócratas, contando apenas con la oposición demócrata-cristiana. El CR se mantuvo hasta la Revisión Constitucional de 1982 que acabó con la tutela militar y estableció la plena democratización <sup>3</sup>.

Por su parte las claves de la mudanza del régimen español se inician con el asesinato por ErA del heredero político de Franco, el almirante Carrero Blanco, en diciembre de 1973, por tanto son anteriores al 25 de abril de 1974. Asimismo la crisis del franquismo era anterior a 1973. La división de la elite del poder entre tecnócratas y falangistas, la agitación entre la clase obrera y los estudiantes, el alejamiento del régimen de la mayor parte de la intelectualidad y de crecientes sectores de las clases medias, las distancias que toma la Iglesia católica ante la dictadura, el terrorismo de ErA, la presión internacional, etc., se remontan por lo menos al desarrollo económico de la década de los sesenta.

Carrero Blanco, el más próximo colaborador de Franco desde 1940, era un duro y en él se identificaban las esencias del franquismo. Poco a poco, había ido ocupando mayores responsabilidades gubernativas, en relación inversa a la senilidad de Franco. Bajo su indicación se había acelerado el mecanismo sucesorio, nombrando a Juan Carlos -el 22 de julio de 1969- heredero oficial del reino. Su modelo político buscaba conseguir un desarrollo económico y un aumento del nivel de vida, a cambio de mantener el Estado autoritario. Su permanencia en el poder garantizaba al régimen su subsistencia, más allá de la

---

<sup>3</sup> R.J. BRUNEAU y A. MACLEOD, *Politics in Contemporary Portugal. Parties and the consolidation of Democracy*, Boulder-Colorado, Lynne Rienner Publishers, 1986, y J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, *La Revolución de los Claveles en Portugal*. Madrid, Arco Libros, 1997.

desaparición física del dictador<sup>9</sup>. Para suceder a Carrero fue nombrado su ministro de Interior Carlos Arias Navarro, que era considerado como un experto en contrasubversión. Parecía claro que la continuidad por la fuerza estaba garantizada, aunque fuese la primera vez que, desde el final de la guerra, un civil ocupase la jefatura del Gobierno. En su primer gabinete (enero de 1974) primó la continuidad: de los diecinueve ministros, ocho pertenecían al de Carrero. Pero el 12 de febrero, en el discurso de investidura, ante las Cortes, anunció un programa de cierto tono moderado en el que, aparte de reiterar que el orden público se mantendría costase lo que costase, habló de participación ciudadana y apertura. Marcó plazos para una mayor ampliación de la base social del régimen estableciendo un calendario del desarrollo político. Indicó, además, que tomaría medidas legislativas tendentes a la elección de alcaldes y presidentes de diputación, que desarrollaría una ley sindical, y que se estudiaría un estatuto de asociaciones conforme a los principios y normas de las Leyes Fundamentales. No era mucho, pero al menos había ciertas mudanzas semánticas. Los sectores del país que exigían la democratización, y en especial la prensa, bautizaron este enunciado de buenas intenciones como «el espíritu del 12 de febrero». Pero en lo único que pareció cumplirse fue en el apartado de orden público.

El Gobierno, para demostrar firmeza contra la creciente contestación, ejecutó dos penas de muerte el 2 de marzo, llevadas a cabo por el método medieval del garrote vil. Una contra el delincuente de origen polaco Heinz Chez y otra contra el anarquista catalán Puig Antich, acusados ambos de la muerte de policías, lo que en el caso de Puig Antich no estaba claro. En toda Europa y en el interior de España se desencadenó una profunda ola de protestas contra el régimen. Si con esto ya había quedado seriamente dañado su prestigio reformista, otro hecho sin precedentes en la historia del franquismo iba a confirmar su intransigencia: el arresto domiciliario del obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, por autorizar la publicación de cuatro homilías, redactadas por la Comisión Pastoral de su diócesis, en las que se pedía el respeto por los derechos del pueblo vasco y de otras minorías nacionales dentro del Estado español. Añoveros y el vicario de su diócesis, por orden directa del ministro del Interior y con la aprobación de Arias Navarro, fueron arrestados en sus domicilios. Franco reaccionó tal como lo hizo

---

<sup>9</sup> Sobre el personaje: J. TUSSELL, *Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.

siempre, impidiendo el enfrentamiento con la Iglesia, pues tenía la clara noción de que su apoyo era fundamental para la subsistencia del régimen. Este incidente significó un mayor distanciamiento entre la Iglesia y dictadura, iniciado ya con el nombramiento, en diciembre de 1971, del cardenal Enrique Tarancón como arzobispo de Madrid primero y como primado de España después <sup>10</sup>.

La apertura, por tanto, no pasaba de una mueca grotesca como se desprende del hecho de que desde el 4 de enero, en que tomó posesión el nuevo gobierno, hasta los primeros días de abril se produjeron 325 detenciones por motivos políticos, siendo Euskadi y Libertad (ETA), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) las organizaciones más afectadas por la represión, y Cataluña y el País Vasco las nacionalidades del Estado con mayor número de encarcelados. Con todo, y a pesar de las dimensiones de la represión, el régimen español aún era más «liberal» que el portugués, pues obras de teatro, películas y publicaciones que circulaban en España estaban prohibidas en Portugal.

Todas estas circunstancias, junto con la diversa madurez político-social y económica de cada país, el hecho de que el franquismo no estuviese tan desintegrado como el caetanismo, la inexistencia en España de una prolongada guerra colonial y la cohesión en la ortodoxia de las Fuerzas Armadas españolas marcaban, en definitiva, diferencias entre los dos regímenes peninsulares. A pesar de ello, cuando el 25 de abril de 1974 las Fuerzas Armadas lusas derribaron el *Estado Novo*, aquí el impacto de la sacudida fue inmenso.

El golpe de Estado portugués fue fundamental para lograr la transición producida. Extremo éste que no niega otros aspectos singulares de la realidad de nuestro país, que también tuvieron un papel decisivo a la hora de garantizar una mudanza pacífica: el toque de atención que significaba la guerra civil y el hecho no menos importante de que en España se ensayara una sucesión monárquica, lo que sin duda, dado el poder moderador del rey, posibilitó un modelo de cambio diferente al portugués. Nadie, a excepción de minorías extremistas, deseaba una repetición de la confrontación civil que había incendiado España cuatro décadas antes. En ese sentido, la más leve posibilidad de un nuevo conflicto servía de freno para las posturas más radicales mode-

---

<sup>10</sup> Sobre su figura y pensamiento: Vicente ENRIQUE y TARANCÓN, *Confesiones*, Madrid, PPC, 1996, y sobre el poder político y el eclesiástico: J. M. CUENCA, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, 1883-1985*, Madrid, 1985.

rando, en cierta manera, la fogosidad de las convicciones y estableciendo un puente entre gente de signo diverso. Esta necesidad de superar las «dos Españas» condujo, a partir de la llegada de Arias al poder, a una retórica de buenas intenciones, que en el fondo no eran más que el deseo de que se produjese un reemplazamiento generacional de la cúpula del poder, de los vencedores de la guerra civil, para poder así definitivamente ordenar nuestra convivencia en paz y libertad. El deseo de mudanza y de reforma era, por tanto, anterior al golpe portugués. Pero esto no invalida las repercusiones que tuvieron, para nuestro país, los acontecimientos vecinos cuyos efectos fueron inmediatos, tanto entre partidarios del régimen como entre los de la oposición <sup>11</sup>.

El golpe de Estado aumentó las contradicciones políticas del Gobierno, potenciando a los sectores liberales y a la propia sociedad civil a través de los medios de comunicación social, alimentados por la política aperturista del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas. Por otro lado, los sectores más conservadores del aparato del Estado temieron el contagio, por eso una de las primeras medidas fue el refuerzo del control de la frontera portuguesa, por parte de los servicios de información de las Fuerzas Armadas, mientras el régimen mantenía una actitud ambigua ante las demandas democratizadoras de la sociedad civil.

Pueden señalarse dos etapas diferenciadas de la influencia portuguesa en España. La primera positiva, que va desde el 25 de abril hasta la caída del general Spínola el 30 de septiembre de 1974, y en la que Portugal fue una ventana abierta por la que discurría un placentero viento atlántico que rejuveneció y agitó el enmohecido árbol franquista; y la segunda, negativa, desde el 30 de septiembre de 1974 hasta finales de 1975, cuando la política portuguesa estuvo dominada por la izquierda, en especial por el PCP, lo que provocó una gran inquietud en el régimen, pues se temió la instalación del comunismo en la frontera terrestre más extensa de España.

Durante la primera etapa las esperanzas de una rápida salida del franquismo fueron propiciadas por la sustitución del general Franco, en julio de 1974, cuando su enfermedad provocó el nombramiento transitorio del príncipe Juan Carlos como jefe del Estado. Días después un nuevo factor externo parecía abonar la mudanza, la caída de la

---

<sup>11</sup> J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, *La revolución portuguesa y su influencia en la transición española*, Madrid, Nerea, 1995, pp. 260 Yss.

dictadura de los coroneles en Grecia, el 23 de julio. Pareció entonces que España no quería quedarse como única «reserva espiritual de Occidente». Pero el 2 de septiembre el general Franco, aparentemente recuperado, reasumió nuevamente sus poderes, esfumándose así la posibilidad de que se pudiese iniciar pacíficamente la transición, aún en vida de éste.

Esta etapa contradictoria estuvo acompañada por una creciente actividad terrorista. La respuesta del régimen fue el endurecimiento y el refuerzo del autoritarismo, al que contribuyó también la aceleración del proceso revolucionario portugués tras la dimisión del general Spínola, el 30 de septiembre, que, en un dramático discurso, señaló que Portugal caminaba hacia en comunismo, lo que inquietó aún más los recelos que tenía todo Occidente, y en especial España. La Revolución portuguesa fue vista desde entonces como un caballo desbocado que inexorablemente se precipitaba hacia el abismo, por lo que la dictadura trató, por todos los medios, de que España no fuese arrastrada en la loca carrera. Así, el 29 de octubre fue dimitido el ministro de Información y Turismo Pío Cabanillas, por decisión expresa del jefe del Estado, asustado por la liberalización excesiva de los medios de comunicación social. Con Cabanillas se solidarizaron diversos altos cargos y abandonaron el Gobierno. El régimen se mostró así incapaz de reformarse. En esa perspectiva la policía detuvo, el 26 de noviembre de 1974, a catorce personalidades de la oposición moderada, entre otros: Felipe González, Nicolás Redondo, Josep Pallach, Antón Cañellas, José Ma Gil Robles, Dionisio Ridruejo, etc.

Pero la represión no consiguió acallar los deseos de mudanza y, ante una agitación cada vez mayor, la dictadura trató de ensayar vías de participación política que le permitiesen, desde el propio sistema, ampliar los cauces. Así aprobó el Estatuto de Asociaciones Políticas, el 16 de diciembre, según el cual las asociaciones sólo podían organizarse dentro del Movimiento Nacional, lo que parecía un intento de recuperar la iniciativa en un momento en que la oposición actuaba con fuerza, polarizada alrededor de la Junta Democrática hegemonizada por el PCE (creada en junio de 1974). Los sectores antifranquistas moderados iniciaron a su vez, en noviembre, los primeros pasos para crear su propia organización. Hubo además un incremento de la movilización laboral, especialmente en Euskadi y Cataluña que, gradualmente, fue extendiéndose por todo el país. En medio de este clima de agitación obrera y estudiantil, de claro contenido político, se produjo la dimisión del



ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente, que ocupaba el cargo desde 1969 y que se había convencido de la necesidad de regular el derecho de huelga, en contra del sector más «ultra» del ejecutivo. Arias aprovechó la crisis para cohesionar su gabinete, por lo que cambió a cinco ministros. Todos los observadores consideraron esta minicrisis como un refuerzo de su poder y el deseo de proseguir el «12 de febrero». El presidente del Gobierno buscaba una línea intermedia que lo distanciase de los sectores más ultras del franquismo y de los de la oposición, cuyos postulados, en su opinión, conducían a la reproducción del modelo portugués. Ésta era la principal contradicción del régimen: por un lado, era consciente de la necesidad de realizar cambios para adecuar la estructura política a las nuevas realidades sociales del país y, por otro, tenía pánico a que todo acabase como en Portugal. Pero la falta de una apertura mínima aumentaba la intransigencia en la contestación a la dictadura. Esa dialéctica retroceso/apertura, que marcó toda la contradictoria etapa de Arias Navarro, se evidenció especialmente tras la radicalización portuguesa con el III de marzo de 1975<sup>12</sup>.

En paralelo con el extremismo portugués el Gobierno español fue endureciéndose, ya que cuanto más a la izquierda estaba Portugal, más a la derecha se colocaba España. Así, el 25 de abril de 1975, el gabinete Arias decretó el estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya por tres meses. Al amparo de éste, la extrema derecha y los cuerpos policiales iniciaron una salvaje represión sin precedentes desde la posguerra, a pesar de la cual no se consiguió acabar con la oposición. Así, el día 11 de junio se realizó una jornada de protesta contra el estado de excepción, que obtuvo una gran adhesión sobre todo en Guipúzcoa, extendiéndose su repercusión a otros lugares del Estado. En ese mes se realizaron también elecciones sindicales, venciendo las candidaturas democráticas impulsadas por la Unión Sindical Obrera (USO) y sobre todo por el sindicato comunista Comisiones Obreras (CCOO).

Por otro lado don Juan de Borbón, en Estoril, donde estaba exiliado, se reunió con la oposición moderada reafirmando a favor de la democracia y del respeto a los derechos humanos, pero manifestó sus divergencias con la fórmula sucesoria franquista de elegir a su hijo como rey, lo que causó una profunda inquietud en los sectores reformistas del régimen, que entendieron la necesidad de actuar con autenticidad y rapidez antes de que fuese tarde. Así, en julio, destacados reformistas

---

<sup>12</sup> Sobre su gobierno: Luis HERRERO, *El ocaso del régimen: del asesinato de Carrero a la muerte de Franco*, Madrid, Temas de Hoy, 1995.

decidieron crear la Federación de Estudios Independientes Sociedad Anónima (FEDISA) que, constituida como sociedad mercantil en lugar de acogerse al marco asociativo del Gobierno, supuso el final del asociacionismo oficial.

En este clima de profunda confusión política y de desorientación del franquismo, otras cuestiones agravaron su debilidad: la aparición de la Unión Militar Democrática (UMD) y la espinosa cuestión del Sahara, complicada por la acción bélica de Marruecos contra unidades del ejército español, mientras que el tradicional aliado del régimen, Estados Unidos, apoyaba la postura marroquí. Para acabar de complicar la escena, el terrorismo aumentó cuantitativa y cualitativamente. La respuesta gubernamental fue la puesta en vigor, el 22 de agosto de 1975, del Decreto-ley Antiterrorista, en el que se contemplaban allanamientos y registros domiciliarios sin mandato judicial y detenciones preventivas de hasta diez días -sin necesidad de entrega a la autoridad judicial-, con lo que el franquismo, en las postrimerías de la vida del dictador, optó claramente por la represión. A finales de agosto, un consejo de guerra decretó la pena de muerte para dos militantes de ETA. Días después otro tribunal militar condenó a la pena capital a otros tres miembros del FRAP y, en días posteriores, nuevas penas capitales serían anunciadas por la justicia castrense. Las críticas contra la dictadura se repetían por doquier, fundamentalmente en los países europeos.

Este clima de excesiva represión sirvió para acercar a los organismos unitarios de oposición, que firmaron un documento conjunto, el 18 de septiembre de 1975, pidiendo las libertades democráticas y la derogación de la legislación antiterrorista. El régimen, para demostrar una solidez de la que carecía, y en un gesto de increíble y contraproducente firmeza, ejecutó, el 27 de septiembre, a cinco antifranquistas, tres de ETA y dos del FRAP, a pesar de las numerosas peticiones de demencia que el viejo dictador recibió, entre las que destacaron las de Pablo VI y Willy Brandt. Como consecuencia de ello, trece países retiraron temporalmente sus embajadores de España; la República Democrática Alemana cortó las relaciones diplomáticas; el presidente de México pidió la expulsión de nuestro país de la ONU y la Comisión Europea propuso la suspensión del comercio con España.

En medio de esta crisis generalizada, el general Franco fue internado el 12 de octubre afectado de graves problemas de salud, iniciando una larga agonía que acabaría con su muerte el 20 de noviembre de

1975. Se cerraba así un largo y trágico período de la vida de España. Dos días después, el príncipe Juan Carlos era proclamado rey de todos los españoles. El 4 de diciembre el monarca confirmó en su cargo a Arias Navarro, aunque parece que hubiese preferido a alguien que estuviese más en consonancia con la nueva etapa que se iniciaba. En el gabinete, aparte de viejos dinosaurios del *establishment* franquista, brillaban los reformistas de signo e intensidades diversas, junto con hombres jóvenes del partido único y de los sindicatos oficiales, destacando Suárez como ministro del Movimiento. El rey nombró para presidir las Cortes y el Consejo del Reino a Torcuato Fernández Miranda, catedrático de Derecho constitucional, falangista convicto que había sido vicepresidente del Gobierno con Carrero Blanco. Concedor minucioso del entramado legal de la dictadura y con una gran influencia sobre su elite política, su total confianza en la monarquía de Juan Carlos, de quien había sido tutor, acabaron siendo decisivos a la hora de hacer aceptar por las Cortes franquistas la Ley de la Reforma Política, que abrió paso a la democratización gradual de la sociedad española <sup>13</sup>. Su decidido apoyo a Adolfo Suárez para sustituir a Arias Navarro, en julio de 1976, tuvo también especial importancia. Con Suárez como primer ministro, un hombre que hasta entonces había demostrado una probada fidelidad al régimen, se inició verdaderamente la transición <sup>14</sup>.

Quien primero planteó desde la oposición una solución para llegar a la democracia fue la Junta Democrática, en agosto de 1974, con un programa de ruptura democrática que pasaba por la formación de un gobierno provisional y la integración de España en Europa. Similar al que propugnaron, en septiembre de ese año, el PSOE y la UGT. A pesar de esa coincidencia los socialistas no entraron en la Junta Democrática porque deseaban una alianza con la Democracia Cristiana y ésta era contraria a pactar con los comunistas. Actitud que compartía la generalidad del PSOE por el miedo de ser subalternizado por el PCE, máxime cuando este partido mantenía unas relaciones muy estrechas con el Partido Socialista Popular (PSP). Pero el PSOE, tras el

---

<sup>13</sup> Ver P. FERNÁNDEZ MIRANDA, *Lo que el Rey me ha pedido*. Torcuato Fernández Miranda y la reforma política, Barcelona, Plaza & Janés, 1995.

<sup>14</sup> Son especialmente relevantes las siguientes obras: J. F. TEZANOS, R. COTARELO y A. DE BLAS (eds.), *La transición democrática española*, Madrid, Sistema, 1989; R. COTARELO (ed.), *Transición política y consolidación democrática (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, y M. REDERO (ed.), «La transición a la democracia en España», *Ayer*, núm. 15, 1(94).

Congreso de Suresnes (octubre de 1974) emprendió el camino de la consolidación interna, prescindiendo de una dirección envejecida y exiliada, bajo la nueva orientación del entonces joven Felipe González. Éste concentró, tras los sucesos portugueses, toda la ayuda de la IS y, además, se empeñó decisivamente en la unidad socialista para que, cuando se iniciase la democratización del régimen, el socialismo se encontrase cohesionado. Así impulsaron varias reuniones, primero en Francia y más tarde en Alemania, a lo largo de 1974-1975, que acabaron convirtiendo al PSOE en el polo vertebrador del socialismo español, quitando cualquier posibilidad de consolidación a otras alternativas como la Confederación Socialista Ibérica o el PSP y, en junio de 1975, el PSOE impulsó la Plataforma de Convergencia Democrática.

La unidad de la oposición no fue fácil y de hecho hasta el 12 de diciembre de 1975 no se constituyó un Comité Coordinador de los dos organismos y hasta marzo de 1976 no formaron una sola plataforma: la Coordinadora Democrática. A las divergencias, tanto tácticas como estratégicas, se juntó la diversa interpretación del proceso portugués. Aunque en principio ambas organizaciones, como la generalidad de la izquierda española, coincidiesen en valorar positivamente los fracasos spinolistas del 28 de septiembre y del 11 de marzo, pronto discreparon sobre el sentido último de la Revolución. En ese sentido, me confirmó García Trevijano: «Tras el 25 de abril, y en especial a partir de la creciente importancia del PCP en Lisboa, los miembros de la Junta Democrática, aunque fuimos recibidos en el Parlamento Europeo, cada vez encontrábamos más dificultades en Occidente para hacernos oír, consecuencia de los sucesos revolucionarios portugueses, pues pensaban que nuestro proyecto conducía a España al comunismo»<sup>15</sup>.

En Europa la actitud del PCP puso en tela de juicio la democraticidad de los comunistas, especialmente en Francia e Italia, donde representaban una fuerza considerable en el mapa político, cuestionando el eurocomunismo al que el PCF, el PCI y PCE se esforzaban en dar credibilidad y que, en teoría, compaginaba el socialismo con las libertades públicas.

A modo de conclusión puede decirse que donde la influencia política se evidenció más daramente fue en el modelo de transición, pues el rumbo izquierdista por el que enveredaba la democracia portuguesa asustaba «a los países de la Europa occidental y a los Estados Unidos

---

<sup>15</sup> Entrevista con Antonio García Trevijano, Madrid. 16 de octubre de 1985.

que, aunque veían con buenos ojos la constitución de una democracia en España, no admitirían sin embargo, de ninguna manera, que el "caso portugués" se repetiese». Así, señalaba Eduardo Barrenechea: «La escalada del PCP en Portugal y sobre todo la forma como la hizo, controlando la cúpula del poder en los meses pasados, fue la mayor contrapropaganda, el método más idóneo para parar las ideologías de izquierda en España [...]. Es indudable que la presión hecha durante largos años sobre España, tanto por los Estados Unidos como por las democracias occidentales, en el sentido de considerar al régimen español como "no homologable" para formar parte de pleno derecho de la CEE se está enfriando en los últimos meses [...]. Un Portugal izquierdista pero absolutamente aislado por una España marcadamente anticomunista era un mal menor [...]. En resumen, cuanto más a la izquierda se sitúe la política portuguesa más a la derecha se colocará la política española»<sup>16</sup>. En ese mismo sentido manifestó Willy Brandt: «No hemos de menospreciar lo que la experiencia portuguesa significó para España. Si en Lisboa una dictadura hubiese sido sustituida por otra, se hubiesen producido en Madrid repercusiones desagradables»<sup>17</sup>. En España fue posible un cambio pacífico, sin excesivas convulsiones, en gran parte gracias «a la paja en el ojo ajeno», procurando la no repetición del fenómeno lusitano. Para ello se quiso que el franquismo reciclado fuese el árbitro del proceso. Yeso había de conseguirse, como decía Kissinger, sin que se produjesen vacíos de poder porque favorecerían al comunismo.

Las imperceptibles reformas de Arias pronto se mostraron inaceptables para la oposición democrática y con su sustitución por Adolfo Suárez, el 13 de junio de 1976, la reforma gradual de la dictadura hizo salir a España del *impasse*, permitiendo la consolidación de un modelo político de libertades<sup>18</sup>.

Cuando en marzo de 1976 se creó la Coordinación Democrática, la oposición inviabilizó la maniobra del poder destinada a dejar fuera al PCE y a otros grupos radicales de izquierda. El PSOE se negó, como había hecho el PS portugués en mayo de 1974, a entrar en el gobierno provisional dejando al PCP fuera. Por otro lado, las fuerzas democráticas

---

16. E. BARRENECHEA, «Portugal como pano de fundo da mudança espanhola», *Expresso*, núm. 151. 6 de noviembre de 1975.

17. W. BRANDT, «Barcelona 1937-Madrid 1977», *Cambio* 16, núm. 288, 19 de abril de 1976.

18. Ver Gregorio MORÁN, *Adolfo Suárez. Historia de una ambición*. Barcelona, Planeta, 1979, y Adolfo SUÁREZ, *Fue posible la concordia*, Madrid, Espasa Calpe, 1996.

no se opusieron frontalmente al referéndum de la Reforma Política y aceptaron la Reforma pactada para no enfrentarse al Ejército y para tender puentes con el franquismo reformista que encabezó Suárez. En septiembre de 1976 el ejecutivo anunciaba su proyecto de Reforma Política que establecía la convocatoria electoral con garantías democráticas. Las Cortes franquistas, entonces, se hicieron el «harakiri»<sup>19</sup>, lo que permitió la convocatoria del referéndum para que el pueblo español se pronunciase sobre la Reforma Política, lo que hizo el 15 de diciembre de 1976 con una participación del 77,7 % y con un 94,1 % de votos favorables. A partir de entonces el ejecutivo que encabezaba Suárez inició el lento desmontaje del entramado autoritario: se autorizan los partidos políticos (aunque inicialmente los comunistas fueron excluidos, legalizándose el PCE en abril de 1977); se generalizó la amnistía y se estableció la Ley Electoral (marzo 1977). Con ese saldo favorable, Suárez organizó en mayo la coalición de centro derecha Unión del Centro Democrático (UCD) que obtuvo la victoria en las elecciones constituyentes de junio de 1977 con el 34 % de los votos, seguidos del PSOE-PSC con el 28,9 %, PCE-PSUC el 9,2 % y de AP con el 8 %.

Tras las elecciones, los constituyentes se encargaron de la elaboración de la Carta Magna, cuyo texto reflejaba el espíritu de la «reforma pactada» que, sometida a votación, fue aprobada con el 87,8 % de votos afirmativos en diciembre de 1978.

En paralelo con la redacción de la Constitución se inició el proceso de reconocimiento de las nacionalidades históricas. Aquellas a las que la II República reconoció su capacidad de autogobierno. Suárez prefirió entenderse con los gobiernos de Euskadi y con la Generalitat en el exilio en lugar de negociar con la mayoría de izquierda que había vencido tanto en Euskadi como en Catalunya. José Ma de Leizaola rehuyendo al protagonismo señaló que la depositaria de la voluntad popular era la Asamblea de Parlamentarios Vascos surgida en las elecciones de 1977, mientras que Iosep Tarradellas exigió el reconocimiento de la institución que presidía, lo que el ejecutivo hizo en septiembre de 1977, por lo que aquél regresó al mes siguiente. En diciembre se aprobó la preautonomía vasca y a partir de marzo de 1978 el Estado de las autonomías se alargó al resto del país, en una operación que desde los nacionalismos históricos se llamó jocosamente como «café para todos» que iba a colmar de malentendidos la vida política del

---

<sup>19</sup> Sobre el búnker en la transición ver el magnífico trabajo de X. CASALS i MESEGUER, *La tentación neofascista en España*, Barcelona, Plaza & Janés, 1998.

país con sonados enfrentamientos entre el centro y la periferia, que el ambiguo redactado del título VIII de la Constitución no ha hecho más que reforzar.

Aprobada la Constitución se realizaron elecciones municipales, en abril de 1979, en las que venció la izquierda en la mayoría de las grandes poblaciones aunque la UCD obtuvo mayor número de ediles, gracias a las zonas rurales. En las elecciones legislativas siguientes la UCD volvió a ganar con mayoría relativa. El panorama institucional se fue definiendo con los referéndums en favor de los Estatutos de Autonomía en octubre de 1979 en Cataluña y en el País Vasco, siendo las primeras nacionalidades en contar con parlamentos propios (marzo de 1980) y resultando vencedores los partidos nacionalistas: el PNV en Euskadi y la coalición CiU en Catalunya<sup>20</sup>.

Aunque ambas transiciones ibéricas se iniciaron en medio de la grave recesión económica provocada por la crisis petrolífera de 1973 que se alargó hasta 1979<sup>21</sup>, tres hechos señalan la especificidad española en relación a Portugal. La existencia pertinaz del terrorismo. ETA culminó su escalada de terror en 1980 con 72 atentados que provocaron 96 muertos y el GRAPO en 1979 con 23 atentados que costaron la vida a 31 personas, lo que contrasta con la levedad del fenómeno en Portugal donde se habían creado en 1980 las Fuerzas Populares 25 de abril, con una actividad terrorista de escasa relevancia, siendo desmanteladas con rapidez por la policía, lo que evidencia su poca implantación social. La pujanza y el sentimiento identitario en las nacionalidades históricas que contrasta con el nacionalismo unitario portugués comprobado en el reciente referéndum en contra de la regionalización (noviembre 1998). Y, por último, el papel desestabilizador y antidemocrático de parte significativa del ejército español que en reiteradas ocasiones, especialmente en febrero de 1981, estuvo a punto de acabar con el sistema democrático<sup>22</sup>, lo que no sucedió en el país vecino, donde a pesar de que las FFAA tuvieron un relativo peso institucional

---

<sup>20</sup> Ver Pere YSÀS, «Democracia y autonomía en la transición española», en REDERO SAN ROMÁN (ed.), *La transición a la democracia en España*, mOllográfico, Ayer, núm. 15, 1994, pp. 77-107.

<sup>21</sup> Sobre esta cuestión ver J. L. GARCÍA DELGADO, *Economía española de la transición a la democracia*, Madrid, CIS, 1990; A. BARRETO (ed.), *A situação social em Portugal, 1960-1995*, Lisboa, ICS-Universidade de Lisboa, 1996, pp. 233-364.

<sup>22</sup> Sobre España ver J. BUSQUETS, «Las Fuerzas Armadas en la transición española», en H. DE LA TORRE, *Fuerzas Armadas y poder político en el siglo XX de Portugal y España*, pp. 275 Yss.

hasta 1982, tras la supresión del Consejo de la Revolución disciplinadamente iniciaron el repliegue a los cuarteles<sup>23</sup>.

### 3. Conclusiones

1. Las transiciones ibéricas se realizaron en una situación de distensión bipolar, lo que favoreció la salida democrática. Aunque en la URSS desde algunos estamentos del PCUS se procuró aprovechar la hipótesis de que en Portugal pudiese implantarse un régimen leninista. Pero la corriente dominante era la gubernamental que prefería llevar a buen puerto la Conferencia de Helsinki que consagraba el *status quo* europeo y no interfirió finalmente en el apoyo occidental al modelo de democracia pluralista, lo que acabó ayudando a desmontar el fantasma de la guerra civil que en noviembre de 1975 parecía próximo. En España la salida pro-occidental de la Revolución portuguesa y el alineamiento del PCE en la corriente eurocomunista, que defendía el respeto al sistema constitucional, permitió reducir la interferencia externa.

2. El régimen español en vísperas de la caída de las dos dictaduras ibéricas era más liberal y disponía de mayor capacidad de maniobra en función de que permanecía en el subconsciente colectivo la pesadilla de la guerra civil y la voluntad de no repetir errores del pasado. También disponíamos de un mayor nivel de modernización económica y social, lo que permitía una reducción de las tensiones. A ello contribuyó, además, la monarquía que, por un lado, consagraba las fidelidades de la dictadura y, por otro, fue capaz de abrirse a postulados democráticos, por lo que acabó congregando a su alrededor a la inmensa mayoría del país. Ayudó también en nuestra transición la inexistencia de un problema colonial de la inmensidad del portugués, que no permitía una reforma gradual de la dictadura, puesto que las complejidades que el problema africano suscitaba no eran dissociables de la propia existencia del régimen autoritario.

3. Los ejecutores del cambio fueron en Portugal las Fuerzas Armadas que, si bien divididas sobre el tipo de régimen que debía implantarse, mantuvieron el control directo de la vida política entre 1974-1975 y un elevado grado de autonomía hasta la Revisión Constitucional de 1982. Con todo el sector militar preponderante -los moderados del

---

<sup>23</sup> Sobre Portugal ver J. SÁNCHEZ CERVELLÓ, «Las FFAA durante la revolución portuguesa: autonomía y reorganización», en H. DE LA TORRE, *op. cit.*, pp. 243 y ss.



MFA- tras las elecciones de abril de 1975, se alió con el PS en su lucha contra la bolchevización del país. El PS, creado en 1973, tuvo el papel más destacado en la movilización civilista contra la amenaza comunista, consiguiendo el apoyo masivo de los países de la CEE y de los EE UU. En España el reformismo tuvo en los liberales del franquismo su mejor baza y éstos encontraron en el PSOE, renovado en 1974 en Suresnes, la colaboración política necesaria y, por eso, este partido y su sindicato la UGr obtuvieron *de facto* legalización *avant la llellre* antes que el resto de las fuerzas de izquierda, especialmente con el objetivo de minimizar al potente PCE y a su sindicato CCOO.

4. En Portugal las Fuerzas Armadas a partir de noviembre de 1975 asumieron, si bien con márgenes de autonomía interna, el respeto a la legalidad democrática y los sectores antidemocráticos, expulsados por la Revolución del aparato del Estado, no tuvieron capacidad de neutralizar el proceso político y el terrorismo siempre fue de débil perfil. En España, por el contrario, las corrientes opuestas a la democratización provenían del propio aparato del Estado, de círculos civiles y militares, que no deseaban que se desmontase el régimen autoritario. Especialmente relevante fue la presión castrense que amenazó con interrumpir el proceso normalizador en diversas ocasiones. En sus presiones desestabilizadoras coincidieron con los grupos terroristas FRAP, ErA y GRAPO, sospechosamente activos en los momentos de mayor tensión política.